

Terremoto y la agenda modernizadora

Patricio Arrau
Doctor en Economía, U. de Pennsylvania
Presidente Empresa Portuaria San Antonio

(Columna diario La Tercera, 20 de marzo de 2009)

La catástrofe nacional del 27 de febrero pasado ha tenido un impacto personal en la vida de muchos compatriotas que ha sido sideral y que se suma al dolor de la pérdida trágica de muchos familiares y amigos. Las prioridades de políticas públicas han cambiado radicalmente para abordar soluciones rápidas a la emergencia humana y material. Es evidente que el violento terremoto tiene bajo fuerte presión a las nuevas autoridades que junto con familiarizarse de sus nuevas responsabilidades deben responder con prontitud a las expectativas. Los errores de manejo de crisis del gobierno saliente no deben empañar su evaluación general, así como las dificultades para responder a las expectativas de parte del gobierno entrante no deben empañar la evaluación de su partida. Nadie está obligado a lo imposible, aunque las lecciones correctas respecto a los sistemas de emergencia no deben quedar en el olvido. La gente ha sido sabia y ha despedido a la presidenta Bachelet con el 84% de popularidad. La presidenta no se va como la primera mujer presidenta de Chile, apelativo que se ganó el primer día de su gobierno, sino que se va como la presidenta de la protección social, querida por un electorado agradecido. Sin embargo, ese mismo electorado le negó a la popular presidenta entregarle la banda al candidato de su coalición y le ha dado su confianza al presidente Piñera, primer presidente de centro-derecha elegido democráticamente en 50 años. Muchos políticos de la actual oposición se rascan la cabeza buscando una explicación razonable para tamaña paradoja. A mi juicio hay una explicación sencilla. La presidenta y su ministro de Hacienda se llevaron el aplauso por las políticas de protección social y el país pudo entender que la pugna política interna de la clase política concertacionista no fue su responsabilidad y que ha retrasado el desarrollo económico del país. La agenda modernizadora del Presidente Piñera y su capacidad de ejecutarla recibió el apoyo electoral, en un contexto de pugnas, pujas y hasta purgas en la Concertación. No es baladí observar que el primer gobierno concertacionista creció al 7,7% anual, tres veces el promedio mundial, mientras el cuarto creció al 2,7% anual, apenas rozando el promedio mundial. La tarea nacional de crecer nuevamente al 6% anual es una tarea que hoy concita una amplia mayoría que es transversal.

Aunque la tragedia de febrero cambió las prioridades de la partida del nuevo gobierno y es comprensible que la agenda que motivó el mandato popular de enero no esté en el centro del debate, es importante que se trabaje desde ya en varios de esos frentes. En particular, una gran preocupación que surge de la demanda de reconstrucción es su forma de financiamiento. Una abrupta liquidación de fondos externos o endeudamiento externo es el impacto en el tipo de cambio y la competitividad nacional. Es imprescindible estar atentos a esta situación y aislar el efecto sobre la competitividad de nuestras exportaciones, mediante emisiones de deuda en pesos en toda la magnitud que acepte el mercado. El mayor impacto en la tasa de interés doméstica es un efecto menor comparado con la

defensa de la competitividad nacional, pilar de nuestro desarrollo. Pero dicha deuda deber3 ser pagada. Una evidente forma de hacerlo es retomar con rapidez las propuestas de campa3a que suger3an que varias empresas p3blicas enfrentaran la disciplina del mercado de capitales colocando participaciones accionarias minoritarias. Estas ideas llevan a3os en el debate, tienen amplio apoyo transversal y han sido bloqueadas por intereses corporativos y por a3osas ideolog3as minoritarias, las mismas que perdieron la elecci3n presidencial. La urgencia nacional amerita acelerar esta agenda. Para no caer en el debate de privatizaciones, es posible identificar un n3mero de empresas que deben permanecer en el control estatal, pero pueden y deben abrirse al mercado de capitales ahora. El modelo ideal para estos casos es el modelo de Petrobras, gigante petrolero de Brasil, donde se conserva el control estatal con “acciones de oro” que le dan al Estado la mayor3a del directorio y que accede al mercado de capitales con acciones ordinarias para financiar su enorme plan de inversiones y valorar la compa3a. Un estatuto especial de empresas p3blicas chilenas de este tipo, modelo que calza con varias, puede ser enviado al Congreso en las actuales circunstancias. Triple objetivo: hacer l3quidos recursos il3quidos del Estado necesarios para la reconstrucci3n; hacerlo defendiendo el tipo de cambio y modernizar los estatutos corporativos y control de gesti3n de varias empresas p3blicas que deben expandirse en el futuro para generar m3s valor econ3mico y para contribuir a un mayor crecimiento potencial del pa3s.